

Declaración de Caracas

Enero de 2006

Nosotros, ciudadanas y ciudadanos de Nuestra América, organizados en redes e instituciones que trabajan por la defensa y ampliación de los derechos en nuestras sociedades, preocupados por el presente y el futuro de la región, nos encontramos durante el VI Foro Social Mundial para examinar las condiciones en que es posible avanzar hacia una genuina integración que se base en el respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos, en el reconocimiento de que las personas, mediante sus representaciones colectivas, son sujetos de poder en las decisiones sobre políticas nacionales y regionales.

CONSTATAMOS que América Latina vive un nuevo tiempo. El agotamiento del esquema neoliberal y la insatisfacción creciente con sus impactos en la vida de las mayorías están abriendo paso a gobiernos más sensibles a los intereses populares. Esta nueva situación, que se acelera a partir del año 2000, nos ofrece señales del surgimiento de nuevos actores políticos, como se puede ver en la elección presidencial —que saludamos— de un indígena, Evo Morales, en Bolivia, y de una mujer, Michelle Bachelet, en Chile.

VALORAMOS la vigorosa movilización social en curso por la defensa de los bienes comunes, contra la privatización de lo público y en favor de modelos económicos orientados al bienestar de las mayorías. La dinámica de los movimientos sociales ha transformado el campo político al redefinir el sitio desde el cual se produce la política, al modificar la forma de hacerla y al incluir nuevos rostros en el escenario público.

IDENTIFICAMOS este momento como una oportunidad que se ofrece a la ciudadanía organizada, a los partidos comprometidos con los intereses sociales y a los gobiernos de nuevo tipo, para lograr profundos cambios en la cultura y los sistemas políticos, tendientes a la democratización del poder y al control ciudadano del Estado y de los actores que se rigen por la lógica del mercado. Esta oportunidad tiene límites pues enfrenta poderosos intereses que podrían reaccionar con agresividad.

AFIRMAMOS el derecho de los pueblos a un desarrollo basado en la inclusión social y el respeto a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, en la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural, en un control de los recursos naturales y energéticos que asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

APRECIAMOS el surgimiento de una ciudadanía que sobrepasa los cercados nacionales. Dicha ciudadanía se expresa a través de redes, coaliciones, plataformas y articulaciones donde participan movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, que defienden los bienes públicos, propagan el impulso democratizador y la internacionalización de ideas, iniciativas y luchas progresistas.

OBSERVAMOS que los derechos vienen siendo recortados en razón de fronteras nacionales y campea la discriminación y exclusión por raza, origen, sexo, opción sexual o nacionalidad, por lo que los ciudadanos de Nuestra América están lejos de vivir como iguales. Esta situación afecta principalmente a millones de migrantes, refugiados y desplazados que sufren la negación de

derechos esenciales cuando merecen un trato acorde con su dignidad, al margen de la situación documentaria o jurídica.

EVALUAMOS que la integración es hoy un campo de contienda en el que se enfrentan distintos proyectos sociales. El actual proyecto hegemónico integra ante todo los mercados, se desarrolla en función de las grandes corporaciones y del capital financiero, desconoce lo social, viola los derechos humanos y se impone a espaldas de nuestras sociedades. La integración hegemónica sacrifica la dignidad de las personas ante la acumulación de capital que incrementa la miseria, marginaliza regiones enteras y torna inviable la convivencia civilizada.

RECONOCEMOS que al proyecto hegemónico se contraponen una integración abierta a la participación decisiva de la ciudadanía, que respeta las identidades culturales y los derechos colectivos, las formas de organización y de vida de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes como sujetos colectivos de derechos, que pone la dignidad de las personas, la solidaridad y la cooperación, por encima de los intereses económicos y de las razones de Estado, que postula economías para la soberanía nacional y el bienestar general.

PERCIBIMOS que este tiempo favorece nuestra actuación en tanto fuerzas organizadas para la defensa y ampliación de los derechos. Sin embargo, son necesarios pasos más audaces que aseguren la democratización de la democracia, amplíen el ejercicio de la ciudadanía y posibiliten un papel autónomo de nuestros países y nuestra región en el concierto internacional.

LAS ORGANIZACIONES, REDES, INSTITUCIONES Y CIUDADANOS DE NUESTRA AMÉRICA:

NO ACEPTAMOS MÁS las imposiciones del poder económico que subordina a nuestros países y produce, mediante sus políticas públicas, la concentración de la riqueza y el consiguiente incremento de la desigualdad y la pobreza.

NO ACEPTAMOS MÁS los dictados de los países ricos, de las instituciones de regulación internacional y de los gobiernos que sacrifican la vida, y en especial a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a los migrantes, mujeres, niños y personas de escasos recursos, al medio ambiente y a la misma posibilidad de un futuro mejor, en aras del crecimiento económico y de la acumulación capitalista. NO ACEPTAMOS MÁS que los pueblos indígenas sean privados de sus derechos, que se violenten sus territorios, se los despoje de sus recursos naturales, se les arrebate su derecho a un desarrollo propio y se desestructuren sus sociedades para incrementar la masa de los pobres del continente.

NO ACEPTAMOS MÁS que doscientos veinte millones de latinoamericanos vivan en la pobreza absoluta, sin gozar de los derechos que les aseguran una vida acorde con su condición de seres humanos, ni que a trece millones de migrantes y desplazados se les prive de sus derechos por no tener un papel, o que otros treinta y tres millones de migrantes, refugiados y desplazados vivan en condiciones de pobreza y marginalidad.

NO ACEPTAMOS MÁS que las leyes se utilicen para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos por nuestro continente, como las recientes leyes

de Seguridad Fronteriza de los Estados Unidos o de Migración y Extranjería de Costa Rica, que violan los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente.

NO ACEPTAMOS MÁS la destrucción de lo público y el secuestro de la política por elites que no tienen otro interés que su propio beneficio y por ello se someten a los intereses del capital transnacional, arruinan los avances democráticos conquistados y transforman la democracia en un mero instrumento de control social y manipulación de conciencias.

NO ACEPTAMOS MÁS que la perversión de lo privado y la cultura patriarcal hagan a mujeres y niñas víctimas de la violencia doméstica, del tráfico y trata de personas, les impida el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, las limite en sus derechos políticos y civiles y las confine al trabajo doméstico y el cuidado familiar.

NO ACEPTAMOS MÁS que en materia de integración las iniciativas de los gobiernos se pauten según los intereses de las grandes corporaciones y del sistema financiero internacional, operando sólo en la lógica de la ampliación de mercados.

NO ACEPTAMOS MÁS la corrupción como instrumento de gobernabilidad y tampoco la impunidad que estimula, contamina y difunde estas prácticas en las formas de sociabilidad, en el sistema político y de los aparatos de gobierno,

NO ACEPTAMOS MÁS que se destruya el derecho inalienable de los pueblos a decidir sobre su destino y que se asigne a las mayorías una ciudadanía de segunda clase, criminalizando a sus organizaciones y hasta encarcelando a sus representantes por encarnar la aspiración a ser sujetos de su propia historia.

NUESTRO CONTINENTE Y LOS PAÍSES QUE LO CONFORMAN, TIENEN DERECHO A UNA INTEGRACIÓN SOBERANA Y AUTÓNOMA, EXPRESIÓN DE LAS ASPIRACIONES DE LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD DE LAS MAYORÍAS.

POR LO ANTERIOR, ASUMIMOS LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

NOS PROPONEMOS actuar conjuntamente en la construcción de una cultura y una ética democráticas, en las que la ciudadanía se asuma propositiva y ejerza control social como responsabilidades en la acción pública, a la vez que desempeñe un rol central en el sistema político que incluye partidos y gobiernos.

NOS PROPONEMOS luchar, desde nuestras organizaciones, por una profunda reforma política, tanto de los partidos como de las instituciones públicas. Ello parte de reconocer el carácter jerárquico, vertical, centralista, patriarcal, y autoritario de nuestra cultura política y superar estas taras mediante la descentralización y la socialización del poder, la implementación de mecanismos participativos de decisión como los referendos y plebiscitos, la realización de las consultas a los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, además de crear nuevas formas de decisión colectiva.

NOS PROPONEMOS luchar por el derecho a la información y el acceso a la información pública como herramienta para la educación política y por la democratización y el control social a los medios de comunicación, como condición esencial para la vida democrática y el ejercicio de la ciudadanía.

NOS PROPONEMOS una integración de sociedades que superen la exclusión que segrega y discrimina, que busquen el desarrollo integral en tanto derecho humano, como despliegue de todas las potencialidades de las personas, las comunidades y los pueblos, las regiones sin excepción y de nuestras naciones en su conjunto, sociedades que aseguren a todos sus miembros el cabal disfrute de sus derechos individuales y colectivos.

NOS PROPONEMOS construir sociedades y estados laicos respetuosos de la diversidad y garantías del pluralismo, en los que ninguna idea se imponga como un apriori y en los que sea posible desarrollar todas las dimensiones del ser humano en un ambiente de tolerancia.

NOS PROPONEMOS que nuestras economías crezcan en función de realizar los derechos de la gente, de garantizar la soberanía de nuestras naciones y de posibilitar la existencia de sociedades y Estados de verdad democráticos. Ello supone privilegiar la producción sustentable y el trabajo, promover el desarrollo científico y tecnológico, generar equilibrios entre los sectores de la economía y las regiones en cada país y entre las diferentes culturas que los pueblan a través de la redistribución de la riqueza y las oportunidades. Un desarrollo que signifique equilibrio entre los países de la región --sobre la base del reconocimiento de las diferencias, las asimetrías y las especificidades, desde la solidaridad y la complementariedad. Tal modelo de desarrollo debe fortalecer el mercado interno, constituir formas de economía solidaria, promover mercados alternativos y utilizar de manera racional los bienes comunes para asegurar el bienestar de las mayorías.

NOS PROPONEMOS que los Estados latinoamericanos accedan por fin a la condición de instrumento de los intereses generales y por lo tanto subordinen la economía a la política democrática y propicien un nuevo modelo de desarrollo, entendido como el disfrute de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en el marco de la equidad, de la justicia y la sustentabilidad.

NOS PROPONEMOS reafirmar la identidad latinoamericana como constelación de múltiples y diversas identidades llamadas a potenciarse en la confluencia con los distintos torrentes del mundo contemporáneo pero sabedoras de su propia significación. Este reencuentro de América Latina consigo misma es precondition de una integración auténtica e implicará un renacimiento que despierte las energías de la región, inspire la democratización de nuestros Estados y aliente la búsqueda de sociedades más justas y equitativas.

NOS PROPONEMOS fortalecer los movimientos sociales y las redes que se movilizan en procura de los derechos y en ejercicio de la ciudadanía. Esto implica articularse, construir agendas comunes y actuar de manera conjunta en los escenarios nacional e internacional como factor de democratización a todos los niveles. Implica también construir instrumentos y mecanismos que los fortalezcan en sus organizaciones y capacidad propositiva.

NOS PROPONEMOS un trabajo de educación ciudadana entendida como educación política, que permita la auto-valoración, la inclusión y el fortalecimiento de la organización de hombres y mujeres, la superación de la historia de dominación en la que a la mayoría de los latinoamericanos le fue asignada la condición de ciudadanos de segunda categoría.

Porque comprendemos nuestro papel central en la construcción de la esperanza, de una nueva cultura política y de una institucionalidad realmente democrática que garanticen un futuro con equidad y justicia para las generaciones actuales y las por venir, invitamos a todas las redes, organizaciones y movimientos sociales a participar y articularse en un movimiento de movimientos que construya una ciudadanía latinoamericana y procure otra integración como propósito urgente, posible y necesario.

Caracas, enero de 2006

Suscriben

• Redes Internacionales

ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR – AFM

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN – ALOP

CENTROAMERICA POR EL DIALOGO – CAD

COMITÉ LATINOAMERICANO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER - CLADEM

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA – CEAL

COORDINADORA REGIONAL DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES – CRIES

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – FIDH

GRUPO SUR

OBSERVATORIO CONTROL INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES – OCIM – PIDHDD

ORGANIZACIÓN REGIONAL INTERAMERICANA DE TRABAJADORES - ORIT

PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO – PIDHDD

• Redes nacionales que suscriben

ASOCIACIÓN BRASILEIRA DE ONG – ABONG

ASOCIACIÓN CHILENA DE ONG – ACCIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO – ANC, Perú

ASOCIACIÓN POLÍTICA DE MUJERES MAYAS – MOLOJ, GUATEMALA

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DEL PERÚ AFECTADAS POR LA MINERÍA – CONACAMI

COALICIÓN DE ONG DE DERECHOS HUMANOS – PIDHDD, Venezuela

CONVERGENCIA DE ORGANISMOS CIVILES A.C., México

ENCUENTRO DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO, Argentina

PLATAFORMA DHESC BRASIL

PROGRAMA MERCOSUR SOCIAL Y SOLIDARIO – SEPA, Paraguay

UNIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL – UNITAS, Bolivia

• Organizaciones nacionales que suscriben

APDH – PIDHDD, Ecuador

APRODEH – FIDH, Perú

CAIDH – FIDH, Guatemala

CEDAL – ALOP, Perú

CENID – FIDH, Nicaragua

CENTRO DE SERVICIO POPULAR – GSCESAP , Venezuela

CENTRO FLORA TRISTAN, Perú

CESAP – SINERGIA, Venezuela

CODEHUPY – PIDHDD, Paraguay

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO – FIDH, Colombia

COMISIÓN ARGENTINA DE JURISTAS – FIDH

EFIP – PIDHDD, Venezuela

ESPACIO DESC – PIDHDD, México

FASE - Brasil

FUNDACIÓN PERSEU ABRAMO, Brasil

FUNDACIÓN AHORA, A.C., México

INDIA – PIDHDD, Venezuela

PET, Chile

PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO - PRODESSA, Guatemala

Para adherirse a los firmantes de esta Declaración, favor comunicarse a info@ceaal.org